EXP: [redacted]

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SENTENCIA DEFINITIVA

Chihuahua, Chihuahua, diez de julio de dos mil veinticuatro.

Sentencia que resuelve en definitiva el procedimiento de responsabilidad administrativa número [redacted], instruido en contra del ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO.**

GLOSARIO

Código de Ética	Código de Ética y Conducta de las personas Servidoras Públicas del Municipio de Chihuahua
Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DSPM	[redacted]
Ley General	Ley General de Responsabilidades Administrativas
IPRA	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
OIC	[redacted]
PRA	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
Subdirección	[redacted]

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Además, las fechas citadas a lo largo de la presente resolución se entenderá que hacen referencia al año dos mil veinticuatro salvo que expresamente se indique la anualidad a la que corresponden.

ANTECEDENTES

1.1. Radicación. El dieciséis de mayo se dictó acuerdo de radicación por parte de la persona [redacted] a través del cual se dio cuenta de la nota periodística publicada en el medio denominado "La Parada Digital" y se ordenó iniciar de oficio con la investigación correspondiente, bajo el número [redacted].

1.2. Calificación de conducta. El diez de junio, la autoridad investigadora consideró que el expediente se encontraba debidamente integrado y que no existían actos o diligencias de investigación pendientes por desahogar, por lo que calificó la falta administrativa como no grave.

1.3. IPRA. El once de junio, la Autoridad Investigadora elaboró IPRA respecto del servidor público involucrado en los hechos investigados, el cual se recibió en esta Área de Responsabilidades en esa misma fecha mediante oficio de número **OIC/AI/362/2024** signado por la persona Titular del Área Investigadora [redacted] al que acompañó el expediente de investigación número [redacted], integrado por doscientas una (201) fojas.

1.4. Radicación y admisión. El once de junio, se radicó el *IPRA*, registrándose ante esta Área de Responsabilidades el expediente bajo el rubro [redacted] y el doce de junio se dictó acuerdo de admisión, en el que se ordenó emplazar al ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**.

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

1.5. Medidas cautelares. Al presentar su *IPRA*, la autoridad investigadora no estimó necesaria la solicitud de medidas cautelares.

1.6. Emplazamiento. Mediante constancia suscrita por [redacted] el día trece de junio se emplazó al servidor público **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** al procedimiento de responsabilidad administrativa, diligencia en la cual se le entregó la documentación a que alude el artículo 193, fracción I, de la Ley General y se le hizo saber de la fecha de su audiencia inicial.

1.7. Presentación de manifestaciones. El día veinte de junio, se presentó el servidor público **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** en las instalaciones que ocupa esta autoridad, presentando escrito mediante el cual expresó sus manifestaciones.

1.8. Audiencia inicial. La audiencia inicial fue celebrada en las instalaciones del [redacted] el día veintiocho de junio, en la cual se tuvo a las partes asistentes realizando las manifestaciones que consideraron pertinentes y por autorizado como defensor al [redacted], en términos amplios que señala el artículo 117 de la *Ley General*.

1.9. Admisión, desahogo de pruebas y alegatos. En el contenido del acta de la audiencia inicial de fecha veintiocho de junio se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas documentales ofrecidas durante la audiencia inicial, se declaró abierto el periodo de alegatos, concediendo un plazo de cinco días hábiles comunes para las partes, atendiendo a que no existían diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar.

1.10. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo del nueve de julio, se tuvo por precluido el derecho para expresar alegatos y se decretó el cierre de la instrucción

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

y se turnó el expediente para la elaboración de resolución, la cual se emite con base en las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Esta Área de Responsabilidades, es competente para conocer y resolver el presente PRA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, primer párrafo, 16, primer párrafo, 109, fracción III, párrafos primero, segundo y sexto de *la Constitución Federal*; 178, fracción III, párrafos primero y tercero de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 1, 3, fracción IV y XV, 9, fracción II, 10, párrafo segundo, 111, 202 fracción V, 203, 205, 207 y 208, fracción X de la *Ley General*; artículos 28, fracción X, 101, fracción III, y 101, bis fracción III, numerales 1, y 4 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, así como por lo previsto en el artículo 44 de los Lineamientos que Regulan el Procedimiento de Responsabilidades Administrativas ante el [redacted], toda vez que el mismo versa sobre una conducta infractora que no está catalogada como grave.

SEGUNDA. - PROCEDENCIA

Ahora bien, previo a continuar con el estudio del expediente al rubro indicado, de conformidad con el artículo 9, último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa de aplicación supletoria al presente PRA, de conformidad con el artículo 118 de la *Ley General*, se analizarán las causales de improcedencia y sobreseimiento del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, ya que, al ser una cuestión de orden público e interés social, su estudio es preferente.

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

Bajo este contexto, una vez realizado el estudio de los autos que integran el expediente en que se actúa, se desprende que no se actualiza ninguna de las causales previstas en los artículos 196 y 197 de la *Ley General*, por lo que se procederá al estudio de fondo en el presente asunto.

TERCERA. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO

En este apartado se verificará que el derecho al debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento hayan sido debidamente garantizadas en el PRA en estudio.

Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro **"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO"**, expone claramente los elementos que integran el concepto de "formalidades esenciales del procedimiento", los que deben respetarse a fin de cumplir con la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión de las partes:

> 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
> 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;
> 3) La oportunidad de alegar; y
> 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas., que es evitar la indefensión del afectado".

Ahora bien, si la primera formalidad esencial de todo procedimiento es que la parte afectada sea llamada ante el órgano de autoridad a fin de que pueda defenderse correctamente; el ser llamado no solamente comprende la posibilidad de que el particular sea emplazado de que existe un procedimiento que pudiera culminar con la emisión de un acto privativo, sino que — de forma más amplia — exige poner a

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

su disposición todos los elementos que le permitan tener una noticia completa del hecho que se le imputa.

Entonces, la finalidad de ser emplazado estriba precisamente en la oportunidad de ofrecer pruebas y de que éstas sean desahogadas. De igual modo, las partes deben tener el derecho de ofrecer alegatos y de que estos sean tomados en cuenta por la instancia resolutora, para que ésta, finalmente, dicte una resolución en la que dirima las cuestiones planteadas.

Atendiendo a lo anterior, y respecto a lo establecido por los artículos 7, fracción VII, en relación con el 111 de la *Ley General*, al ser deber de esta autoridad proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Norma Fundamental, especialmente el debido proceso para las partes, corresponde a esta instancia llevar a cabo el análisis integral de la tramitación del *PRA*, para primeramente, verificar que la substanciación del procedimiento se haya realizado conforme a las formas y tiempos previstos en la *Ley General*.

Bajo este contexto, de las constancias se advierte que el señalado como presunto responsable fue debidamente emplazado, ya que la autoridad substanciadora practicó diligencias por la que el servidor público señalado como presunto responsable acudió a las instalaciones que ocupa este [redacted] fue suscrita la cédula de notificación por comparecencia, haciéndole entrega de todas las documentales a las que alude el artículo 193, fracción I de la Ley General, con lo que se hizo de su conocimiento de manera detallada y precisa los hechos imputados, además, se le hizo saber el derecho de no declarar en contra de sí mismo, ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con uno, le sería nombrado de oficio.

Luego, con la anticipación prevista en el artículo 208, fracción IV se citó a las demás partes, para que concurrieran a la audiencia inicial, en la que al no presentarse el presunto responsable, le fue asignado un defensor de oficio, quien protestó el cargo

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

para actuar en representación del presunto responsable en los términos amplios del artículo 117 de la Ley General, expresó manifestaciones y se le dio oportunidad de ofrecer pruebas.

Las pruebas que obran en el expediente fueron admitidas y desahogadas en los términos previstos por la *Ley General.*

Luego, una vez desahogadas todas las pruebas ofrecidas, y al no existir diligencias pendientes para mejor proveer, se declaró abierto el periodo de alegatos, actos que se notificaron a todas las partes durante la celebración de la audiencia inicial.

Finalmente, se dictó acuerdo en el que, se decretó el cierre de la instrucción y se turnaron los autos para dictar resolución, mismo que se notificó a las partes, con lo que resulta claro que en el PRA en estudio las formalidades esenciales del procedimiento fueron debidamente garantizadas.

CUARTA. - CASO CONCRETO

I. Hechos Atribuidos

La autoridad investigadora expone en su IPRA, que **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**, en ejercicio de sus funciones como [redacted] incurrió en las faltas administrativas no graves, previstas en el artículo 49, fracciones I y VI de la Ley General, en razón de los siguientes hechos:

> *Que el día dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro fue publicada una videograbación a través de una nota periodista con el encabezado "¡Se hizo la carnita asada con los bomberos!" a través del periódico digital "La Parada Digital" a mediante la liga URL: https://laparadadigital.com/se-hizo-la-carnita-asada-con-los-bomberos/, video con una duración de un minuto con dos segundos, en dicha nota periodística se observan cuatro elementos masculinos y dos femeninos reunidos durante el día en un lugar al*

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

aire libre portando uniformes oficiales, así como también se observan diferentes alimentos, bebidas y envases con etiqueta blanca semejantes de botellas de cerveza a su alcance; de dicho video se puede identificar de manera clara a ***Juan Manuel Morales Alvarado*** *quien cuenta con el puesto de* [redacted] *con cargo de* [redacted] *quien está departiendo con los demás elementos a quienes se le observa riendo, ya que uno de los elementos uniformado realiza un baile inapropiado y con tintes sexuales previa presentación de otro elemento quien se encuentra de pie, al fondo de esta escena se aprecian dos vehículos estacionados pertenecientes a* [redacted] *sin lograr identificarse los números de unidades ya que las imágenes alejadas no son claras.*

II. Falta que se Imputa

Del IPRA, se advierte que las faltas que se imputan al ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** son las previstas en el artículo 49, fracciones I y VI, de la Ley General, cuyo tenor literal se expone:

> *Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:*
>
> *I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;*
>
> *VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo.*

Al respecto, la autoridad investigadora señala que, con los hechos narrados **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**, transgredió la obligación que tiene como servidor público de cumplir con las atribuciones encomendadas, entre las que se encuentra el ser una figura ejemplar y de liderazgo frente a su personal, por lo que

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

fue omiso en observar en su desempeño disciplina y respeto, y con ello transgredió los principios de legalidad y comportamiento digno que prevé el Código de ética.

Así mismo, la autoridad investigadora expresa que, con su actuar **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** omitió su obligación de supervisar a los servidores públicos sujetos a su dirección, que también aparecen en el video, faltando así a la disciplina, honor y decoro que debe guardar el [redacted].

QUINTA. - CAUDAL PROBATORIO

Precisado lo anterior, para estar en aptitud de realizar un estudio de fondo, lo procedente es determinar si con las constancias que integran el expediente, es posible tener por acreditados los hechos que dieron lugar a las faltas imputadas, para luego determinar, en su caso, la responsabilidad del ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**.

En ese sentido, de manera previa se procederá a enunciar los medios de prueba ofrecidos por las partes, para luego valorarlos.

A. Pruebas de la autoridad investigadora.

En el expediente fueron admitidas y desahogadas las siguientes pruebas ofrecidas por la autoridad Investigadora:

> **I.- La documental pública,** consistente en copia certificada del alta de fecha treinta de enero de dos mil uno de **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO,** como [redacted] con la que pretende acreditar la calidad de Servidor Público a la fecha (foja 88)

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

II.- La documental pública, consistente en copia certificada del Formato Único para trámites de Recursos Humanos de fecha cuatro de abril de dos mil veintidós en donde se acredita la calidad de Servidor Público a **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO,** con el puesto de Coordinador de Bomberos cuyo nombre de cargo es el de [redacted] 87)

III.- Documental Publica, consistente en Acuerdo de Radicación de fecha dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro mediante el cual se ordena se forme el expediente de investigación bajo el número [redacted] a través de la cual se pretende acreditar el inicio de la investigación (foja 01)

IV.- Impresión de la nota periodística, publicada por el periódico digital "La Parada Digital" a través del URL https://laparadadigital.com/se-hizo-la-carnita-asada-con-los-bomberos/, el dieciséis de mayo del presente año y mediante cual la Autoridad Investigadora tuvo conocimiento de hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas por parte de **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** (Foja-02), a fin de acreditar la comisión de la falta administrativa y la presunta responsabilidad.

V.-Documental pública, consistente en oficio DSPM/SJ/PRL/120/2024 mediante el cual la [redacted] a esta Autoridad Investigadora sobre la nota periodística https://laparaadigital.com/se-hizo-la-carnita-asada-con-los-bomberos/, publicada el dieciséis de mayo del presente año mediante el cual anexa videograbación en el dispositivo de almacenamiento digital CV-R. **(fojas 04)** a fin de acreditar la comisión de la falta administrativa y la presunta responsabilidad.

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

VI. Documental pública, consistente en oficio ALLD/256/2024 mediante el cual la [redacted] adjunta en copia certificada el oficio DSPM/SA/JRH/804/2024 signado por la Lic. [redacted] mediante el cual anexa el listado de los nombres con fotografía de servidores públicos pertenecientes al [redacted] **(fojas 96-184)** a fin de corroborar la identidad del imputado y su aparición en el video que da lugar a la comisión de la falta imputada.

VII. **Captura de pantalla** del segundo veintinueve de la videograbación publicada a través del periódico digital "La Parada Digital" a través del URL https://laparadadigital.com/se-hizo-la-carnita-asada-con-los-bomberos/, con la que se pretende crear convicción acerca de la identidad del imputado y su aparición en el video que da lugar a la comisión de la falta imputada **(foja 13)**

VIII. **Documental Pública**, consistente en copia certificada por parte del [redacted] de la Carta Compromiso para la Observancia y Cumplimiento del Código de Ética y Conducta de las Personas Servidoras Públicas del Municipio de Chihuahua signada por **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** el día quince de julio de dos mil veintidós, con la que se dice acreditar la comisión de la falta administrativa y la presunta responsabilidad. **(fojas 95)**

B. Pruebas ofrecidas por la defensa de los presuntos responsables

En el expediente fueron admitidas y desahogadas las siguientes pruebas ofrecidas por el presunto responsable y su defensa:

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

I. Copia simple del oficio 012/2023, signado por [redacted] dirigido al [redacted] en la que le solicita apoyo para la elaboración de evaluación de peligros (sic) y creación de plan de contingencia.

II. Copia simple del oficio DSPM/SHCB/439/2023, signado por **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** ostentando el cargo de [redacted]. [redacted] en el que rinde informe de acciones realizadas en seguimiento al oficio 012/2023.

III. Instrumental de actuaciones

IV. Presuncional legal y humana

C. Valoración probatoria

La *Ley General* establece en su artículo 130 que para conocer la verdad de los hechos la autoridad resolutora podrá valerse de cualquier persona o documento, sin más limitación que la de que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente y con pleno respeto a los derechos humanos, estando únicamente excluida la confesional a cargo de las partes por absolución de posiciones.

Esa misma normativa señala que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, mientras que los artículos 133, 134 y 165 de la *Ley General* disponen las reglas para la valoración de la prueba.

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Por su parte, el artículo 138 y 141 de la *Ley General* dispone que no serán objeto de prueba: el derecho y los hechos notorios, pudiendo la autoridad que resuelva referirse a ellos aun cuando las partes no los hubieren mencionado.

Sobre esas premisas, así como atendiendo a la legislación supletoria de primer y segundo orden, se procede a valorar las pruebas y constancias que obran en el expediente, en los términos siguientes:

A la totalidad de las documentales públicas ofrecidas por la autoridad investigadora, identificadas en el apartado I de esta consideración, se les reconoce valor probatorio pleno por lo que respecta a su autenticidad, así como en cuanto a la veracidad de los hechos que en ellas se refieren al haber sido emitidas por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones y no ser objetadas o controvertidas por otra prueba con el mismo valor. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 131 y 133 de la *Ley General*.

En cuanto a las probanzas de la autoridad investigadora identificadas con los numerales IV y VII se les otorga valor indiciario al contener los hechos controvertidos cuya existencia se trata de demostrar por parte de la autoridad investigadora, por lo que únicamente podrán hacer prueba plena sobre la veracidad de los hechos alegados si se fortalecen con el contenido de los demás elementos de convicción que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí en términos de lo dispuesto por los artículos 131 y 134 de la Ley General, 54 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua y 363 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

En cuanto a las copias simples ofrecidas por **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO,** si bien es cierto, por regla general, las copias simples de cualquier

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

documento, por sí mismas, no tienen fuerza de convicción, en virtud de que no existe la certeza de que su contenido coincida con su original. Empero, dichas copias simples pueden tener fuerza de convicción, cuando en autos existen elementos suficientes para evidenciar que corresponden a su original

Al respecto, se debe tener presente que la mayor o menor fuerza de convicción que produzcan (las copias simples) depende de que existan o no elementos con los cuales puedan ser adminiculadas para verificar su autenticidad. Esto es, las copias simples, por sí solas, constituyen solamente un indicio, cuyo valor puede incrementarse en la medida en que existan otros elementos que corroboren su autenticidad, o bien, puede decrecer con la existencia y calidad de elementos que contradigan esa autenticidad.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el número 2a. CI/95, con registro digital 200,696, del tenor literal siguiente:

> **COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTÁ CONCATENADA CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCION**. *Si bien una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede negarse que es un indicio y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra adminiculada con otros elementos probatorios, su correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador.*

Por lo que toca a la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones esta probanza será valorada atendiendo a la sana crítica, así como a los principios rectores del procedimiento de responsabilidad administrativa, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos materia de la presente resolución.

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

Con base en los términos de la valoración de pruebas expuesto, esta Autoridad resolutora procederá a determinar si se acreditan los hechos que la autoridad investigadora atribuye a **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**, en estricta observancia de los principios que rigen los procedimientos de responsabilidad administrativa, es decir, de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos.

Lo anterior, sin dejar de considerar que los medios de prueba y su valoración deben generar como resultado un estándar de prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia en favor de los presuntos responsables de faltas administrativas, contemplada en el artículo 135 de la *Ley General*.

SEXTA. - ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS

Lo procedente es determinar, con las constancias que integran el expediente, la existencia de los hechos que dieron lugar a la comisión de la falta administrativa que se imputa al ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**.

Bajo este contexto, el material probatorio analizado reúne las características de pluralidad, pertinencia e interrelación, generando fuerza de convencimiento sobre los hechos imputados por la autoridad investigadora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley General, el que dispone que los medios de prueba que ofrezcan las partes obtenidos de manera licita, harán prueba plena cuando a juicio de la Autoridad resolutora resulten fiables y coherentes de acuerdo con la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de forma tal que generen convicción sobre la veracidad de los hechos.

Así, si bien es cierto a diversas pruebas reseñadas en la consideración quinta, se les dio el valor de indicio en lo individual; no obstante, en su conjunto y al analizarlas

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

a la luz del resto de las constancias que obran en el sumario que se resuelve, forman convicción mediante la integración de la prueba circunstancial.

Al respecto resulta aplicable, *mutatis mutandis* la tesis *CCLXXXIV/2013,* emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2004756, cuyo tenor literal es el siguiente:

> ***PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICIOS PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR.*** *A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es posible sostener la responsabilidad penal de una persona a través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo cierto es que deben concurrir diversos requisitos para que la misma se estime actualizada, pues de lo contrario existiría una vulneración al principio de presunción de inocencia. Así las cosas, en relación con los requisitos que deben concurrir para la debida actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, los mismos se refieren a dos elementos fundamentales: los indicios y la inferencia lógica. Por lo que hace a los indicios, debe señalarse que los mismos deben cumplir con cuatro requisitos: a) deben estar acreditados mediante pruebas directas, esto es, los indicios deben encontrarse corroborados por algún medio de convicción pues, de lo contrario, las inferencias lógicas carecerían de cualquier razonabilidad al sustentarse en hechos falsos. En definitiva, no se pueden construir certezas a partir de simples probabilidades; b) deben ser plurales, es decir, la responsabilidad penal no se puede sustentar en indicios aislados; c) deben ser concomitantes al hecho que se trata de probar, es decir, con alguna relación material y directa con el hecho criminal y con el victimario; y d) deben estar interrelacionados entre sí, esto es, los indicios forman un sistema argumentativo, de tal manera que deben converger en una solución, pues la divergencia de alguno restaría eficacia a la prueba circunstancial en conjunto.*

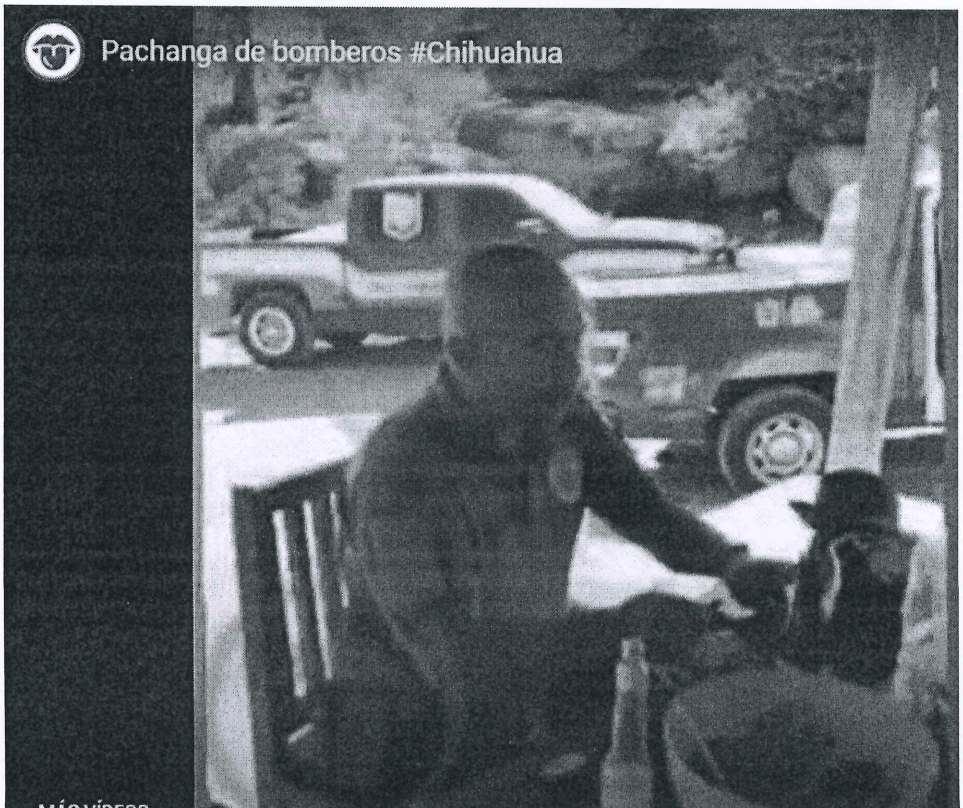
En concreto, los hechos materia de la controversia que se resuelve consisten en la aparición de **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** en una videograbación que

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

lo muestra en una convivencia en la que, acompañado de otros elementos de la corporación, portando uniforme y haciendo uso de vehículos pertenecientes al [redacted] se realiza un baile inapropiado y con tintes sexuales respecto del cual se generan risas y burlas.

Tal como lo señala la autoridad investigadora, en el periódico digital "La Parada Digital", se aprecia un video, mismo que a la fecha en que se dicta la presente resolución todavía aparece en el enlace: https://laparadadigital.com/se-hizo-la-carnita-asada-con-los-bomberos/, el cual, a su vez se puede visualizar en la plataforma YOUTUBE y en la red social FACEBOOK.

Este video fue reproducido por esta autoridad resolutora y efectivamente en el segundo veintinueve se aprecia al señalado como presunto responsable, portando una playera que tiene inserto un escudo de la corporación a la cual pertenece, así como frente a el, una botella color ámbar con etiqueta blanca, de la que no se aprecia la identificación del producto, dado que ésta se cubre con un refractario color amarillo.



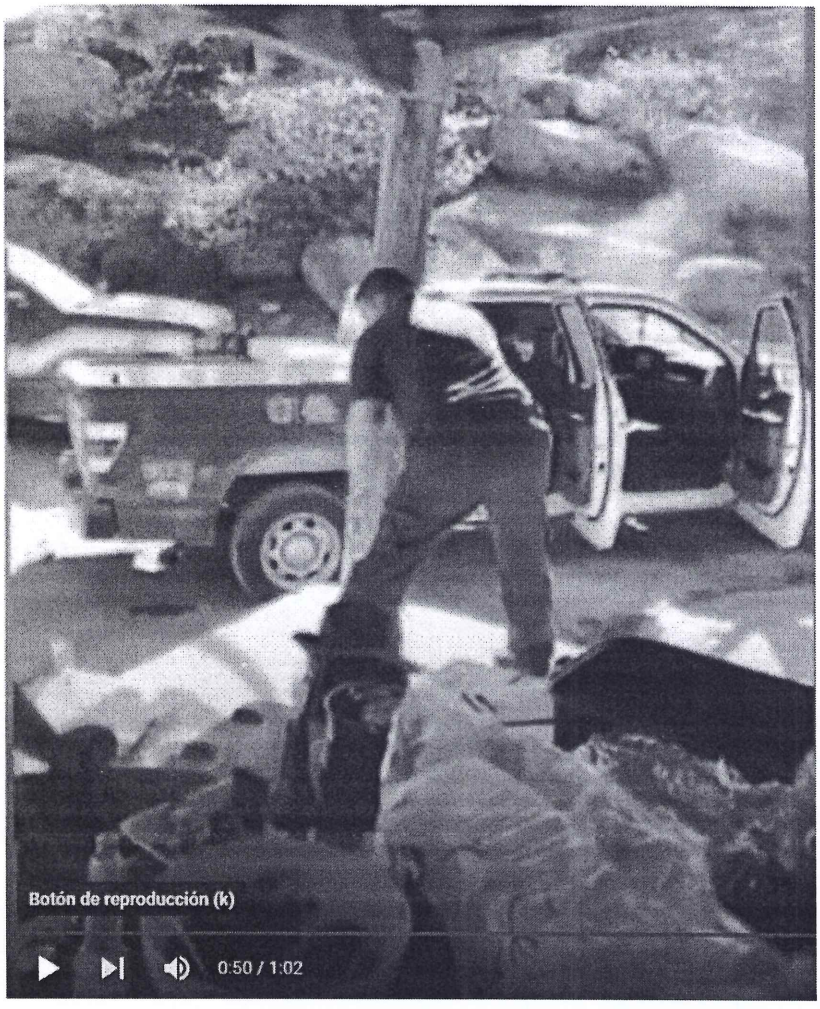
El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

De la misma forma, en esa toma, se aprecian dos vehículos oficiales, cuyo color y grabados laterales permiten crear la convicción de que pertenecen a la corporación, contrario a lo expuesto por el presunto responsable en su escrito de manifestaciones.

Esto se ve fortalecido también con el dicho del presunto responsable, quien señaló el número económico de ambas unidades, siendo uno el [redacted], asignado a **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**, según consta en el formato de resguardo de unidad que obra en el expediente a foja 112.

Luego, en cuanto a la afirmación de la autoridad investigadora en el sentido de que en el video publicado se presenta un baile inapropiado y con tintes sexuales, el que provoca risas y burlas entre los presentes, esto se aprecia claramente del segundo cuarenta y uno al cincuenta y siete del video publicado en el medio digital.



El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas

[redacted]

Bajo ese contexto, del cúmulo de las pruebas admitidas y desahogadas, así como de la visualización directa del video que aparece en el enlace señalado por parte de la autoridad investigadora, así como en la plataforma YOUTUBE y en la red social FACEBOOK, es posible para esta autoridad resolutora identificar al ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** dentro de la videograbación que fuera publicada en el medio digital "La Parada Digital", el día dieciséis de mayo, lo que da certeza a esta resolutora de su participación en los hechos reprochados.

SÉPTIMA. - ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN

Una vez que se ha determinado la existencia de los hechos que dieron lugar a la comisión de la falta, lo que corresponde es determinar si **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** es responsable de la comisión de las faltas que se le imputan, por lo que se procederá a verificar si los hechos en que participó pueden subsumirse a las hipótesis normativa que se consideran infringidas, lo cual, de acuerdo a la autoridad investigadora, son las obligaciones contenidas en el artículo 49, fracciones I y VI de la Ley General[1].

Para lo anterior, en aras de cumplir con el principio de tipicidad aplicable al derecho administrativo sancionador[2], se analizará si se actualizan los elementos que integran la falta en los términos que la autoridad investigadora realiza su imputación.

---

[1] *Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:*
I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;
VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo.

[2] Tesis: P./J. 100/2006 de rubro: TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, con registro digital 174326.

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

Al respecto, se tiene que los elementos que la falta prevista en la fracción I del artículo 49 de la Ley General, atribuidos por la autoridad investigadora, son los siguientes: a) Que el acto sea cometido por un servidor público; b) Que el acto lo realice con motivo de las funciones, atribuciones o comisiones encomendadas; c) Que con su actuar se deje de observar la disciplina y respeto en los términos del Códigos de ética.

Mientras que los elementos de la falta contemplada en el artículo 49, fracción VI, además del carácter de servidor público, son: a) Que el servidor público tenga personal a su cargo y, b) Que sea omiso en llevar a cabo labores de supervisión.

Aclarando que por cuestión de lógica en los razonamientos que se verterán, el estudio se realizará primero, en forma conjunta para ambas infracciones, respecto del elemento consistente en el carácter de servidor público y que este cuente con facultades de dirección, luego se analizará el elemento contenido en el inciso b) de la fracción I en forma conjunta con el inciso b) de la fracción VI, ya que ambos se refieren a las funciones encomendadas, para finalmente analizar el tópico relativo a la inobservancia de la disciplina y respeto en los términos del Códigos de Ética.

A. Que el acto sea cometido por un servidor público

En primer término, se debe determinar si el ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** tenía, al momento de la realización de los hechos que se le imputan, el carácter de servidor público.

La autoridad investigadora acreditó tal elemento con copia certificada del Formato Único de Trámites en donde se aprecia el alta de **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO,** como [redacted], desde el día primero de febrero de dos mil uno, visible a foja 088.

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

Aunado a lo anterior, del contenido de las constancias del expediente que se resuelve se advierte que mediante oficio R.H. 0427/2024 visible a foja 085, el [redacted] informó a la autoridad investigadora que a esa fecha el ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** se encontraba activo como servidor público, mientras que el [redacted] remite su nombre y fotografía como anexo al oficio DSPM/SA/JRH/804/2024, en el que aparece a fojas 179, con número de empleado [redacted]

De lo anterior, se desprende que el presunto responsable es sujeto de la Ley General en términos de lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto de la Constitución Federal, 178, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 4, fracción I de la Ley General y, en consecuencia, se tiene por acreditado el primer elemento típico de las faltas imputadas.

B. Que el servidor público cuente con facultades de dirección

Este elemento queda debidamente acreditado con el contenido de la copia certificada del Formato Único para Trámites de Recursos Humanos, en donde se establece que, a partir del primero de abril de dos mil veintidós **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO,** cuenta con el puesto de [redacted].

Luego, atendiendo al contenido del Manual de Organización de [redacted] que obra a partir de la foja 14 del expediente, se des[redacted] el puesto de [redacted] se traduce en el cargo de [redacted], estableciéndose dentro de los datos generales de dicho puesto que el mismo tiene 216 personas a su cargo.

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

Además, en la descripción de dicho puesto se establecen, como parte de la contribución a la misión de la dependencia, las tareas de *dirigir, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de su área,* por lo que resulta claro que JUAN MANUEL MORALES ALVARADOR es un servidor público que tiene personal a su cargo y por tanto, cuenta con facultades de dirección; en consecuencia, el elemento en análisis se tiene por acreditado.

C. Funciones encomendadas

En este punto se analizará si la conducta de acción atribuida a **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**, consistente en participar en actos que desprestigian la imagen del [redacted] se realizó con motivo de sus funciones y, también se estudiará si la conducta que se le imputa, consistente en ser omiso en llevar a cabo labores de supervisión en torno al personal a su cargo, se actualiza.

Lo anterior, ya que, de acuerdo a los razonamientos hechos por la autoridad investigadora en su IPRA, las conductas atribuidas al ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** fueron efectuadas en atención a las funciones que tenía encomendadas.

Bajo ese contexto, se estima necesario, en primer término, definir el vocablo *función,* mismo que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, significa "Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o personas."

En el caso concreto, los hechos atribuidos y que ya se tuvieron por acreditados, versan acerca de la aparición de **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** en un video en el que se le muestra con uniforme, riendo con el baile que uno de los acompañantes realiza, apareciendo las unidades de la Subdirección, con lo que dejó de cumplir con su función de representar una figura de liderazgo al interior del área

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

que le corresponde dirigir, lo que trae como consecuencia que su comportamiento no sea ejemplar para el resto de los integrantes de la Subdirección.

Luego, al ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**, como [redacted] corresponde dirigir, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de su área, y como parte de sus actividades permanentes descritas en el Manual de Organización de [redacted] destaca para el caso concreto, las relativas a supervisar a todo el personal, apegarse a las reglas y regulaciones vigentes.

De ello, deriva que **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** sí haya incumplido con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, aunado a que al no supervisar adecuadamente a los servidores públicos bajo su dirección, permitió que en el marco de la comisión que tenía encomendada en el Parque Nacional Cumbres de Majalca, tal como lo señaló en su escrito del veinte de junio el presunto responsable, fuera tomado un video en el que se muestra al personal a su cargo realizando acciones que en nada abonan al desempeño eficaz y eficiente del [redacted].

Por esta razón, es inconcuso que, ante el cargo conferido a **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**, a éste le corresponde supervisar de manera activa al personal a su cargo, resultando de sus propias manifestaciones que, efectivamente las personas que aparecen en el video publicado en un medio digital, forman parte de la Subdirección..

Dichas declaraciones se robustecen con las constancias que obran en el expediente, consistentes en el oficio DSPM/SA/JRH/804/2024 signado por la Lic. [redacted] mediante el cual anexa el listado de los nombres con fotografía de servidores

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

públicos pertenecientes al [redacted] en la que aparecen los nombres de los siguientes servidores públicos:

Servidor público	No. de empleado
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

De lo anterior, resulta claro que los hechos que hoy se atribuyen **a JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**, y la falta consistente en dejar de observar disciplina y respeto durante el ejercicio de sus funciones, también les pudiera ser atribuible a estos; no obstante, para el presunto responsable esta conducta es doblemente reprochable ya que él la pudo haber evitado, pues dada su facultad de supervisar y dirigir, a él le correspondía vigilar con atención las actividades realizadas por los otros servidores públicos.

Es decir, el hecho de contar con un puesto de la naturaleza conferida al servidor público señalado como presunto responsable, implica un deber de cuidado superior, que incluso conlleva moderar los comportamientos de aquellos a su cargo.

Por el contrario, en el caso concreto, tal como lo expone la autoridad investigadora, se ha acreditado, más allá de toda duda razonable que **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** participó y permitió que, durante el desarrollo de una comisión en el marco de las actividades encomendadas a la [redacted] se practicaran actos contrarios a la disciplina, honor y decoro debidos al [redacted]

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

En tales condiciones, se arriba a la convicción de que los hechos imputados a JUAN MANUEL MORALES ALVARADO, se realizaron con motivo de sus funciones y que dicho servidor público fue negligente en las labores de supervisión, por lo que el elemento en análisis se tiene por acreditado.

D. Que con su actuar se deje de observar la disciplina y respeto en los términos que se establezcan en el Código de Ética

En este elemento se debe determinar si la actuación del ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**, consistente en su aparición en un video publicado en un periódico digital implica el incumplimiento a su obligación de observar disciplina y respeto, en los términos del Código de Ética.

Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el vocablo disciplina implica la obligación de observar las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto, y el segundo, viene del latín *respectus* que significa 'atención' o 'consideración' y puede definirse como la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo, al que se le reconoce valor social o especial deferencia. El respeto como valor significa preocuparse por el impacto de nuestras acciones en los demás.

El respeto constituye una de las reglas mínimas de comportamiento a las que se encuentra obligado todo servidor público en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas con motivo de su empleo, cargo o comisión, por lo que, si se traslada la premisa anterior al presente caso, se obtiene que, para que se acredite la infracción que se le imputa al servidor público involucrado, se debe comprobar que con su conducta dejó de observar las leyes relacionadas con las atribuciones que tenía conferidas con motivo de su cargo.

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

Así, lo que procede es analizar el marco normativo que reviste el desempeño **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** como servidor público.

Al respecto, la autoridad investigadora refiere que con su actuar **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**, infringió los artículos 41 y 42, fracciones VIII y XXIII del Reglamento del [redacted] cuyo tenor literal dispone:

Artículo 41.- Para efectos de este Reglamento se entiende por disciplina, el respeto y el aprecio que debe tener el elemento para sí mismo y sus compañeros y compañeras, privilegiando la puntualidad en el servicio, la ausencia de vicios, así como la obediencia y subordinación a las personas superiores jerárquicas; sujetando su conducta a un alto concepto del honor, la justicia y la ética, con irrestricto apego y respeto a los derechos humanos, tales como la vida, la dignidad, la integridad física y el patrimonio de las personas a las que sirven. Considerándose está como la base del funcionamiento y organización a la que deben sujetarse tanto personal operativo como administrativo en servicio, en estado de alerta y en situaciones de emergencia.

Artículo 42.- Todo elemento del [redacted] tendrá las funciones y obligaciones siguientes:

IX. Portar con dignidad y conservar en buen estado y sin alteraciones su uniforme, equipo de protección personal y aditamentos cuando se encuentre en servicio;

XXIII. No participar en la ejecución de actos u omisiones contrarios a las disposiciones reglamentarias consagradas en el presente ordenamiento o que constituyan infracciones a la legislación supletoria en la materia, que impliquen la suspensión temporal o definitiva de sus labores como elementos de la Subdirección, cualquiera que sea el medio o procedimiento que se emplee, que impidan en el

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

Estado o en el Municipio, el ejercicio de sus funciones como elementos integrantes de los cuerpos de seguridad pública;

Bajo este contexto normativo, se puede advertir que, tal como lo expone la autoridad investigadora, en el caso concreto JUAN MANUEL FLORES ALVARADO fue omiso en portar con dignidad su uniforme, ya que como se expresó en la consideración sexta, en el video materia de la controversia se visualiza al presunto responsable, portando una playera que tiene inserto un escudo de la corporación a la cual pertenece.

Por tal razón, y, dado el contenido del video en el que se aprecia a los integrantes del Cuerpo de Bomberos celebrando un baile que tiene una connotación sexual, tal como lo señala la autoridad investigadora, es evidente que se dejó de lado la importancia en el significado de los símbolos que los integrantes de las dependencias portan en sus prendas.

Al respecto, no pasa desapercibido el argumento de defensa vertido por el presunto responsable, en el sentido de que la playera que viste y que aparece en el video publicado en el medio digital no forma parte de los uniformes institucionales que son entregados por la [redacted]; no obstante, suponiendo, sin conceder, que la prenda que aparece no haya sido adquirida con recurso públicos, es evidente que en la misma aparece el escudo de la [redacted], lo cual se considera representativo de dicha entidad pública.

Lo anterior, genera para esta autoridad resolutora la convicción de que con su actuar **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** dejó de portar su uniforme con dignidad, violentando la obligación que le confiere el artículo 42, fracción IX del Reglamento [redacted] y, consecuentemente su actuar fue contrario a la

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

disciplina y respecto que debe guardar, pero sobre todo al principio de legalidad que reviste a todos los servidores públicos.

Aunado a lo anterior, no debe de perderse de vista que, en todo momento aparecen los vehículos oficiales de la Subdirección, los que sin lugar a dudas pertenecen a la misma, por lo que en la colectividad surge la apreciación de que los mismos no son utilizados para brindar el servicio público para el cual son conferidos, sino para reuniones y convivencias del personal adscrito a las dependencias y que cuenta con el resguardo de los mismos, con lo que se afecta el estado de derecho.

Por otra parte, la conducta desplegada por el presunto responsable no corresponde con los estándares que deben prevalecer en el comportamiento de los servidores públicos, ya que con su actuar, **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** no atendió el capítulo cuarto del Código de Ética, denominado *"De la conducta de las personas servidoras públicas del municipio",* en el que se incluye como tal el comportamiento digno, traduciéndose éste en observar un comportamiento responsable, serio y respetuoso, lo que en la especie no aconteció, pues **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** dejó de considerar el impacto que generaría su aparición en el video.

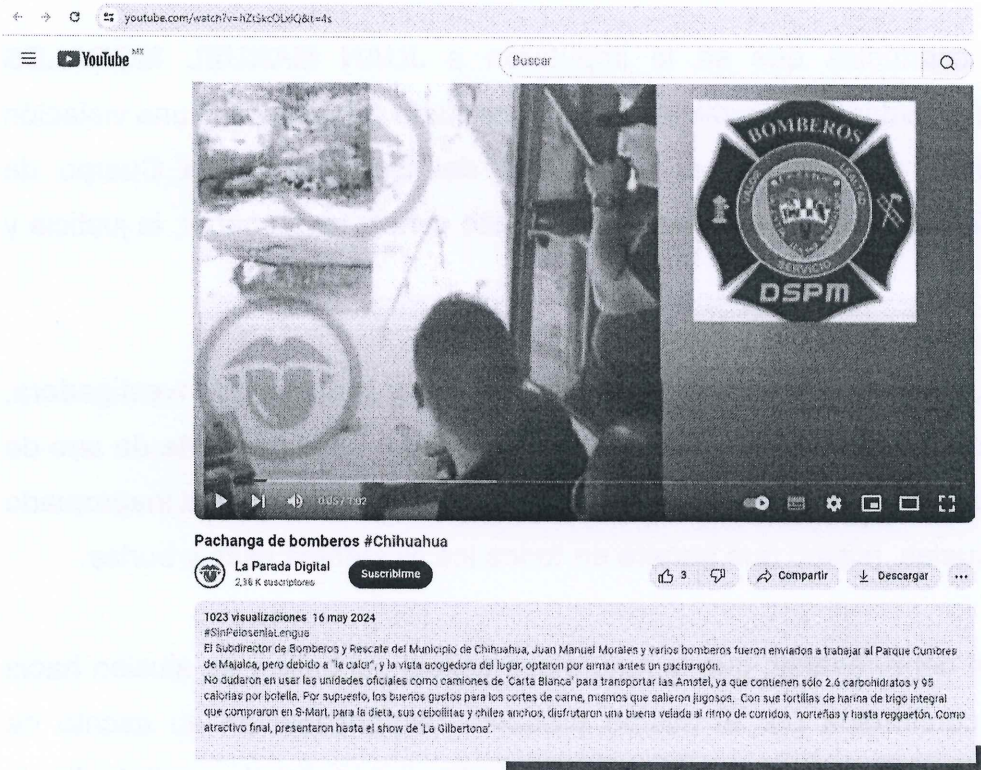
Al respecto, debe decirse que, tal como se manifestó en la consideración relativa a los hechos, el video no solo fue publicado en la dirección del medio "La Parada Digital", sino que también se aprecia en la plataforma YOUTUBE y en la red social Facebook, siendo que los últimos dos medios indicados si dan cuenta de las visualizaciones y comentarios que se han generado en torno a dicho video.

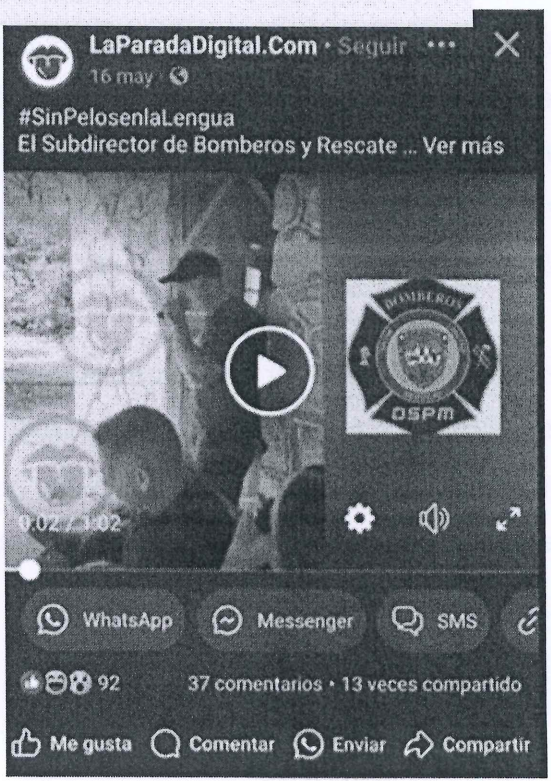
Así, en la plataforma YOUTUBE, se aprecia que al momento en que se emite la presente resolución el video materia de la controversia, cuenta con 1,023 (mil veintitrés) visualizaciones, mientras que en FACEBOOK, se advierte que el video ha sido compartido en 13 (trece) ocasiones, con 92 (noventa y dos) reacciones y 37

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

(treinta y siete) comentarios, los que en su mayoria manifiestan desaprobación no solo por las personas que aparecen en el mismo, sino que trascienden a la administración pública municipal, por lo que no cabe duda de que el actuar de **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** y la falta de supervisión a su personal generó desprestigio a la imagen institucional.





El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Esto, a su vez implica un desacato a la obligación conferida en el Reglamento de la corporación relativa a no participar en la ejecución de actos u omisiones contrarios a las disposiciones reglamentarias, la que de suyo aplica para todos los miembros de la Subdirección, pero en el caso del aquí presunto responsable, se robustece, dada la naturaleza de su cargo, al conllevar deberes de supervisión.

Además, las conductas que se le imputaron a **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**, derivadas de la publicación del multicitado video, implica una violación a la encomienda que dispone el artículo 41 del Reglamento del [redacted] relativa a sujetar su conducta a un alto concepto del honor, la justicia y la ética.

En este punto, conviene hacer alusión a lo resaltado por la autoridad investigadora, en el sentido de que en el video publicado se realiza un baile por parte de uno de los también servidores públicos, el que es calificado por aquella como inapropiado y de tintes sexuales, mismo que genera en todos los asistentes risas y burlas.

Al respecto, se debe resaltar, que la naturaleza sexual del baile y su alusión hacia la mujer fue confirmada por el mismo presunto responsable en su escrito de manifestaciones en el que refiere expresamente que quien lo realizó dio la referencia de haber trabajado en un *centro nocturno de nombre* [redacted] *y que en ese lugar las chicas bailaban en un tubo y se subían en el de una forma impresionante y con una fuerza en las piernas enorme por que había algunas que subían alto y no se caían aun soltando las manos del tubo.*

Esta manifestación, deja ver el incumplimiento al artículo 41 del Reglamento del [redacted] por parte de JUAN MANUEL MORALES ALVARADO, ya que el contenido del video publicado no resulta compatible con el alto concepto del honor, es decir con la dignidad y buena reputación que debe permear en los

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

servidores públicos, sobre todo en aquellos que pertenecen a la Subdirección, al tratarse de un cuerpo colegiado que cuenta con alta presencia ante la sociedad.

Lo anterior se afirma, ya que al permitir su realización **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** no sólo faltó a su deber de supervisión, sino que dejó de cuidar al personal a su cargo, en específico a quien ejecutó el multicitado baile, pues dicha acción no solo generó risas y burlas entre los presentes, sino en los ciudadanos que vieron el video, afectando con ello no solo a dicho servidor público sino a la honorable corporación a la que pertenecen.

Además, no debe perderse de vista que, de acuerdo al Código de Ética, el comportamiento digno también implica para las personas servidoras públicas del Municipio de Chihuahua no incurrir en violencia en contra de las mujeres y contribuir con la erradicación de estas conductas en el espacio laboral, público y familiar, situación que, ante las manifestaciones de **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**, genera la presunción de que dicho servidor público no está preponderando dicho comportamiento y, por tanto, no atendió el marco jurídico que rige su actuar.

Así es, el principio de legalidad dispuesto por el Código de Ética, en su artículo 4, fracción I, inciso b), obliga a las personas servidoras públicas a conducirse invariablemente con pleno respeto del Estado de Derecho, cumpliendo las normas jurídicas inherentes a la función que desempeñan, por lo que es su obligación conocer y cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulen el ejercicio de sus funciones, así como apegarse a los principios éticos.

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Dicha regulación, se encuentra además plasmada desde el artículo 109, fracción III de la Constitución Federal[3], así como en los artículos 6 y 7 de la Ley General[4] que obligan a los servidores públicos a actuar con pleno respeto al estado de derecho y contar con una actuación ética y responsable, traduciéndose la primera, de acuerdo al Código de Ética, en el conjunto de principios, valores, costumbres y normas de conducta, que deben ser practicados de un modo estrictamente racional y consciente, para justificar nuestros actos desde el punto de vista de lo correcto e incorrecto.

En esta tesitura, el elemento en análisis se tiene por acreditado, tomando como base los hechos que ya fueron verificados, por lo que válidamente se puede afirmar que, **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** fue omiso en cumplir a cabalidad con sus funciones, ya que con su actuar desprestigió la imagen del [redacted] fue omiso en representar una figura de liderazgo, y portar el uniforme con dignidad, dejando de supervisar al personal a su cargo y, por tanto, dejó de atender la disciplina a que se encuentra obligado en el servicio público.

Bajo este contexto, una vez valoradas las pruebas ofrecidas, en conjunto con lo evidenciado del resto de las constancias que obran en autos del expediente, así como de los argumentos vertidos por las partes, es posible para esta autoridad concluir que han quedado plenamente acreditados cada uno de los elementos que integran las faltas atribuidas al ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**,

---

[3] Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones

[4] Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

así como su intervención y culpabilidad más allá de toda duda razonable al no actualizarse causal de justificación o excluyente de responsabilidad.

A mayor abundamiento, la Primera Sala de la Suprema Corte, ha señalado[5] que, la duda razonable puede presentarse al menos en dos situaciones relacionadas con la existencia de pruebas de descargo: (i) cuando éstas confirman la hipótesis de la defensa, de tal manera que ellas acreditan una hipótesis total o parcialmente incompatible con la hipótesis de la acusación; y (ii) cuando a través de esas pruebas se cuestiona la credibilidad de las pruebas de cargo que sustentan la hipótesis de la acusación.

En ese tenor, se da cumplimiento al estándar probatorio de valoración de las pruebas de cargo y de descargo, contenido en la Jurisprudencia de rubro: **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO[6],** la que señala que las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, y cuando la hipótesis de inocencia alegada por la defensa esté corroborada con elementos exculpatorios, por lo que al no actualizarse ninguna de las dos razones expuestas, las pruebas ofrecidas por la autoridad investigadora son suficientes para vencer la presunción de inocencia, por lo que ante la responsabilidad de **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**, se procederá a individualizar la sanción.

OCTAVA. - INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

---

[5] Tesis 1a. CCXXI/2015 (10a.), con registro digital 2009467, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SITUACIONES EN LAS QUE LAS PRUEBAS DE DESCARGO PUEDEN DAR LUGAR A UNA DUDA RAZONABLE.**

[6] Jurisprudencia número, 1a./J. 2/2017 (10a.), con registro digital 2013368.

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

I.Elementos a tomarse en cuenta

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley General, para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 75 de la misma normativa, se deben considerar los elementos siguientes:

1. Cargo desempeñado, nivel jerárquico, antecedentes y antigüedad en el servicio público. Tal como ya se advirtió al analizar los elementos de las faltas administrativas cuya comisión se ha acreditado **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO,** ha sido servidor público en el municipio de Chihuahua desde el primero de febrero de dos mil uno, por lo que cuenta con veintitrés años de antigüedad.

En cuanto al cargo desempeñado en la fecha de los hechos, **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO,** contaba con el puesto de [redacted], que se traduce en el cargo de [redacted]

Atendiendo a lo anterior, dichos elementos se valoran en perjuicio del presunto responsable, toda vez que por su antigüedad en el [redacted] y el puesto que desempeñaba en el servicio público, válidamente se puede concluir que estaba en aptitud de conocer los alcances de sus funciones, así como que debía atender de forma estricta sus obligaciones y los principios que rigen su actuar.

2. Condiciones exteriores y los medios de ejecución. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 49, fracciones I y VI de la Ley General por parte de **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** que derivan de su aparición en el video publicado en un periódico digital, la plataforma YOUTUBE y la red social Facebook, pone de manifiesto su falta de observancia al principio de legalidad y del debido

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

cuidado en el ejercicio de su facultad de supervisión al interior de un cuerpo colegiado de trascendencia como lo son los [redacted]

Además, cobra relevancia la manifestación vertida por el ahora infractor en el sentido de que la publicación obedece a una conducta alevosa por parte de una de las personas servidoras públicas que también aparecen en el video, bajo el argumento de que la misma pertenece a diverso grupo político, lo que pone de manifiesto su omisión de fomentar la cooperación[7] al interior de la Subdirección, así como su liderazgo como titular de dicha dependencia.

Adicionalmente, las conductas que se le reprochan, implican la comisión de varias faltas administrativas derivadas de un mismo hecho, lo que agrava la conducta, por lo que se descarta cualquier posibilidad sobre la existencia de alguna causa de justificación o cumplimento de un deber y, por el contrario, se considera que con su actuar desacreditó la imagen institucional de la Subdirección y, por ende, afectó el servicio público.

En consecuencia, este factor se valora en perjuicio del presunto responsable.

3. Reincidencia. De los registros que obran en el [redacted] se advierte que el señalado como presunto responsable no había sido sancionado en materia administrativa anteriormente por parte del [redacted] por lo que no se considera al ciudadano **Juan Manuel Morales Alvarado** como reincidente.

II. Sanción a imponer

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley General, las faltas calificadas como no graves, ameritan las siguientes sanciones:

[7] Consiste en que las personas servidoras públicas colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

I. Amonestación pública o privada;

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; que podrá ser de uno a treinta días naturales.

III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y

IV. Inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público la que no podrá ser menor de tres meses ni podrá exceder de un año

Además, dicho precepto faculta a los [redacted] a imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa.

Esto se traduce en la necesidad de alcanzar la necesaria y debida proporción entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que toda sanción debe determinarse en congruencia con la relevancia de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad.

Este, constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a las autoridades y reduce el ámbito de las potestades sancionadoras, por lo que se debe adecuar la sanción a las conductas cometidas, aplicando criterios valorativos descritos en la norma, así como aquellos inferibles de principios integradores del ordenamiento jurídico.

Es decir, para que se respete el principio de proporcionalidad indicado, resulta insuficiente que la sanción impuesta se encuentre dentro de los márgenes o límites legalmente establecidos, pues es necesario adecuarla a la infracción cometida.

Bajo este contexto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, 49, fracción I y VI, 75, fracción **II,** y 76 de la Ley General y 101 bis, fracción III, numeral 4, del

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, en uso de la facultad discrecional otorgada a esta autoridad resolutora para individualizar la sanción administrativa, y habiendo tomado en consideración los elementos objetivos y subjetivos de las faltas cometidas se impone al infractor la sanción consistente en **SUSPENSIÓN EN EL EMPLEO SIN GOCE DE SUELDO POR UN PERIODO DE TREINTA DÍAS NATURALES.**

Dicha sanción, se estima proporcional y razonable ya que atiende a la naturaleza de los hechos acontecidos y la afectación que estos produjeron al servicio público; además, obedece a la necesidad de suprimir este tipo de conductas que, sin duda alguna, infringen el deber que se impone a los servidores públicos del municipio de Chihuahua de actuar en todo momento apegándose a los principios de legalidad y comportamiento digno, así como la finalidad de las sanciones, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro.

Por último, esta sanción se ejecutará en términos de lo establecido en los artículos 208, fracción XI, 222 y 223 de la Ley General, por lo que deberá remitirse copia certificada de la presente resolución a la persona superior jerárquica del infractor y a la Subdirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, en forma inmediata.

NOVENA.- VISTA

No pasa desapercibido para esta autoridad que, en el video materia de la controversia, aparecen otros servidores públicos pertenecientes a la Subdirección a quienes pudiera imputárseles también la conducta relativa a la omisión de observar en su comportamiento disciplina y respeto al estado de derecho que regula su actuar.

Por ello, con fundamento en el artículo 49, fracción II, de la Ley General, que obliga a denunciar respecto de los hechos y omisiones que esta autoridad administrativa

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

llegue a advertir en el ejercicio de sus funciones, se deberá dar vista al área de investigaciones del [redacted] para que en uso de sus atribuciones, proceda conforme a derecho.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. - Es existente la infracción objeto del presente PRA y se tiene por acreditada la responsabilidad del ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO,** al haber incumplido la obligación contenida en el artículo 49, fracciones I y VI, de la Ley General, conforme a lo señalado en la consideración séptima de la presente resolución.

SEGUNDO. - Se impone a **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO**, la sanción señalada en la consideración octava, numeral II de la presente resolución, consistente en **SUSPENSIÓN EN EL EMPLEO SIN GOCE DE SUELDO POR UN PERIODO DE TREINTA DÍAS NATURALES** la cual deberá ejecutarse de manera inmediata, en términos de lo establecido en los artículos 208, fracción XI, 222 y 223 de la Ley General.

TERCERO.- Una vez que cause estado la presente resolución, se registrará en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXII, 27 cuarto párrafo, de la Ley General y 48 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

CUARTO. - Remítase copia certificada de la resolución a la [redacted] a efecto de que sea agregada al expediente personal del ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO** y que,

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, la cumplimente e informe a esta autoridad sobre ello, dentro del plazo de diez días, contados a partir de la notificación de esta sentencia.

QUINTO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 208, fracción XI de la Ley General, remítase copia certificada de la presente resolución a la persona superior jerárquico del infractor.

SEXTO. – Gírese oficio al área de investigaciones del [redacted] a efecto dar vista de los posibles hechos constitutivos de faltas administrativas, en términos de lo dispuesto en la consideración novena.

SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente al infractor; y por medio de oficio a la autoridad investigadora, con fundamento en los artículos 116, 118, 193, fracción VI de la *Ley General* y 78 de la *Ley Administrativa*.

OCTAVO. En la diligencia de notificación, hágase del conocimiento del servidor público sancionado que cuenta con un plazo de quince días para impugnar la presente resolución mediante Recurso de Revocación, previsto en el artículo 210 de la *Ley General*.

NOVENO. - Realícense las actividades necesarias para que, una vez que cause estado la presente resolución, se dé debido cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia.

DÉCIMO.- Cumplimentados los presentes resolutivos; archívese el expediente de cuenta como asunto total y definitivamente concluido, previos los registros correspondientes en el libro de gobierno del Área de Responsabilidades.

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

[redacted]

Así lo resolvió y firma, la [redacted]

en su calidad de autoridad resolutora.

Chihuahua capital de trabajo y resultados
2021 - 2024
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ÁREA DE RESPONSABILIDADES

Esta hoja de firma, pertenece a la resolución dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa número [redacted] instruido en contra del ciudadano **JUAN MANUEL MORALES ALVARADO.**

El presente documento ha sido testado, en cumplimiento a los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 23, 68, fracción VI, 100, 106 fracción III, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia e Información Pública; 109, 117 fracción III, 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; cuarto, séptimo, fracción III y octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.